

INTER PRESS SERVICE

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA
Del miedo a la libertad vigilada

Kintto Lucas
Compilador

Colección Entre dos siglos



Abya-Yala
2001

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA

Del miedo a la libertad vigilada

© Inter Press Service

Compilador: Kintto Lucas

Primera edición
en español
2001

Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Telfs.: 2 562633/2 506-267/2 506247
Fax: 2 506255/2506267
E-mail: editorial@abyayala.org
www.abayala.org
Quito-Ecuador

ISBN: 9978-04-743-3

Diseño de portada: Raúl Yépez

Autoedición: Martha Vinueza

Impresión: Producciones digitales Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impreso en Quito-Ecuador, noviembre del 2001

ÍNDICE

Jaque a las torres

Terror real como espectáculo mayor, <i>Mario Osava</i>	9
La amenaza de una nube tóxica, <i>Katherine Stapp</i>	11
Alerta en centrales nucleares, <i>Danielle Knight</i>	13
Atentados avivan debate sobre energía, <i>Danielle Knight</i>	16
Alarma ante armas biológicas, <i>Thalif Deen</i>	18
FMI y Banco Mundial cancelaron su asamblea, <i>Jim Lobe</i>	20
Guerra contra el terrorismo se pierde en la ONU, <i>Thalif Deen</i>	23
Tratado antiterrorista, lejos de la ratificación, <i>Thalif Deen</i>	25
Estados Unidos estrecha controles en Internet, <i>Diana Cariboni</i>	27
Estados Unidos presiona a Canadá para modificar política migratoria, <i>Mark Bourrie</i>	30
Lucha antiterrorista desconocerá libertades, <i>Gustavo Capdevila</i>	33
Jaque a las libertades civiles, <i>Yojana Sharma</i>	35
Libertades, una baja de guerra, <i>Samanta Sen</i>	38
Clamor contra la guerra, <i>Satya Sivaraman</i>	40
Encuestas internacionales contradicen a Bush, <i>Abid Aslam</i>	42
Alianza civil contra excesos del antiterrorismo, <i>Jim Lobe</i>	44
Pacifistas reman contra corriente, <i>Yojana Sharma</i>	46
La televisión patriota, <i>Jim Lobe</i>	49
Neonazis señalados por atentados con ántrax, <i>Ranjit Devraj</i>	52
Ley de patentes agrava amenaza de antrax. <i>Ranjit Devraj</i>	55
Triste vigilia de árabes y asiáticos, <i>Akhilesh Upadhyay</i>	57
Un país rigurosamente vigilado, <i>Jim Lobe</i>	59

Dolor afgano

Otra guerra amenaza a un país devastado, <i>Nadeem Yaqub</i>	65
Afganos se defienden con armas estadounidenses, <i>Ranjit Devraj</i>	68
Para Gran Bretaña todo afgano es posible terrorista, <i>Samanta Sen</i>	70
La amapola financia al Talibán, <i>Ranjit Devraj</i>	72
Talibán conserva apoyo en la población saudita, <i>N. Janardhan</i>	74
ONU se prepara para asistir a millones de personas, <i>Thalif Deen</i>	77
No basta con mermelada y mantequilla, <i>Samanta Sen</i>	79
Choque de intereses complica sucesión del Talibán, <i>Ranjit Devraj</i>	81
Civiles con valor estratégico, <i>Nadeem Yaqub</i>	83
ONU acusada de usar alimentos como arma, <i>Thalif Deen</i>	86

Designios de Estados Unidos en Afganistán son una incógnita, <i>Jim Lobe</i>	88
Disputa por el control de Afganistán, <i>Praful Bidwai</i>	91
Discrepancias sobre el futuro de Afganistán, <i>Mushahid Hussain</i>	94
Se cierra la principal puerta de salida de los refugiados, <i>Muddassir Rizvi</i>	96
El gobierno de Pakistán jaqueado, <i>Muddassir Rizvi</i>	99
El mundo musulmán contra ampliación de guerra, <i>N. Janardhan</i>	101
En Pakistán ex-mujaidines se unen contra Talibán, <i>Nadeem Yaqub</i>	103
ONU alerta sobre posible matanzas de civiles, <i>Gustavo Capdevila</i>	106
Entre la guerra y el hambre, <i>Nadeem Iqbal</i>	108
El paso del tiempo conspira contra Estados Unidos, <i>Jim Lobe</i>	110
Pacifistas entre dos fuegos, <i>Nadeem Iqbal</i>	112
Encrucijada latinoamericana	
Atentados propagan ondas de tensión, <i>Diego Cevallos</i>	119
Tragedia latinoamericana en Nueva York, <i>Kintto Lucas</i>	121
El TIAR renace en los escombros de las torres gemelas, <i>Gustavo González</i>	125
Todos contra los árabes, <i>Mario Osava</i>	128
América Central se adhiere a la guerra, <i>Néfer Muñoz</i>	130
Otra víctima de los ataques, <i>Néfer Muñoz</i>	133
Heridas en la aviación, <i>Yojana Sharma</i>	135
Integración postergada por tensión mundial, <i>Patricia Grogg</i>	138
Ruego peruano, <i>Abraham Lama</i>	140
Inseguridad favorece fuga de capitales, <i>Andrés Cañizález</i>	142
Ataque a Afganistán atrasa reactivación, <i>Gustavo González</i>	144
Fragmentado apoyo latinoamericano, <i>Diego Cevallos</i>	147
En Argentina víctimas de atentados piden evitar venganza, <i>Marcela Valente</i>	150
Fidel Castro exige el cese del terrorismo desde Estados Unidos, <i>Dalia Acosta</i> ...	153
Fidel Castro adhiere a todos los acuerdos antiterroristas, <i>Patricia Grogg</i>	155
Remesas de emigrantes cubanos amenazadas, <i>Dalia Acosta</i>	157
En Ecuador caen remesas de emigrantes tras los atentados, <i>Kintto Lucas</i>	161
Crisis internacional amenaza solidez económica, <i>Gustavo González</i>	163
Triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay es un barril de pólvora, <i>Mario Osava</i>	165
Máscaras de Bin Laden y Bush para animar fiestas mexicana, <i>Diego Cevallos</i> ...	168
Emigrantes de México en la guerra y el gobierno en la diplomacia, <i>Diego Cevallos</i>	170
Atentados hieren relación bilateral entre Estados Unidos y México, <i>Diego Cevallos</i>	172
Crece cerco en torno de emigración a Estados Unidos, <i>Diego Cevallos</i>	174
Atentados encienden la luz roja en el turismo, <i>Diego Cevallos</i>	176
Bioterrorismo enciende alarmas en América Latina, <i>Diego Cevallos</i>	179
INTER PRESS SERVICE.....	183

Un país rigurosamente vigilado

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El Senado de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad un proyecto de ley antiterrorista que organizaciones de derechos humanos consideran inconstitucional y contrario a las libertades básicas.

El proyecto fue aprobado por 98 votos contra uno, mientras que la Cámara de Representantes había respaldado la iniciativa por 357 votos contra 66. Si bien artículos extremadamente severos no fueron aceptados, Bush logró la aprobación de casi todas sus propuestas.

El gobierno presentó el proyecto de ley antiterrorista luego de los devastadores atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, el 11 de septiembre.

La futura ley amplía los poderes del gobierno federal y otorga mayor autoridad a los servicios de seguridad para realizar operaciones de vigilancia, intervenir comunicaciones e investigar en secreto a sospechosos de terroris-

mo, mientras limita la fiscalización judicial. La norma incrementa las sanciones para quienes alberguen terroristas o los financien e introduce cambios en el derecho al debido proceso.

Por ejemplo, las autoridades pueden retener a esos inmigrantes sospechosos un máximo de siete días antes de presentarlos ante el juez.

Otra medida controvertida faculta al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a elegir objetivos de vigilancia dentro de Estados Unidos, algo que tenía prohibido hasta el momento.

El proyecto de ley también amplía la definición de “terrorismo interno”, de tal manera que los promotores o participantes en protestas por razones políticas podrían ser sometidos a la intervención de sus comunicaciones e incluso a proceso penal.

La iniciativa fortalece leyes existentes contra el lavado de fondos de origen ilícito y agrega varias figuras penales -terrorismo, fraude, corrupción y contrabando- a la lista de delitos sujetos a las leyes federales de lavado de dinero.

La aprobación del proyecto de ley, luego de cinco semanas de intensos debates y negociaciones, se produjo mientras otros países toman medidas similares tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

La Unión Europea (UE) considera legislación que reduciría en gran medida los derechos de los inmigrantes.

Los gobiernos de Canadá e India presentaron a sus parlamentos iniciativas que ampliarían los poderes del Estado a costa del contralor judicial y las libertades civiles, advirtieron Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otros grupos de derechos humanos.

Los mismos grupos manifestaron su preocupación ante el proyecto votado por el Congreso estadounidense, especialmente por sus eventual impacto sobre los extranjeros.

HRW y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, ambos con sede en Nueva York, sostienen que la ley permitiría al Departamento de Justicia detener a los extranjeros en forma indefinida, si no puede deportarlos, mientras crea que representan una amenaza para la seguridad nacional.

“Tanto ciudadanos como no ciudadanos (estadounidenses) tienen el derecho a no ser detenidos en forma arbitraria o indefinida”, advirtió el director de HRW Kenneth Roth.

“A la vez que Estados Unidos se defiende del terrorismo también debe reforzar la defensa de las libertades que han caracterizado al país”, agregó.

Incluso antes de que el Congreso aprobara el proyecto, estas organizaciones manifestaron inquietud porque unas 1.000 personas, casi todos inmi-

grantes musulmanes sin ciudadanía estadounidense, continúan detenidos en relación con los atentados del 11 de septiembre.

La mayoría fueron retenidos como “testigos materiales” de los hechos o por delitos menores de inmigración. Uno de ellos, un pakistaní que permaneció en el país luego de que venciera su visa, murió de una enfermedad cardíaca en una cárcel de Nueva Jersey, donde había sido llevado.

“Tiene que haber más apertura y transparencia. Hemos pedido más información sobre quiénes son detenidos y si tienen acceso a un abogado. Pero no obtuvimos nada”, explicó Jeanne Butterfield, directora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Algunos activistas creen que los artículos más polémicos de la nueva ley, sobre todo los que afectan los derechos de los inmigrantes, serán cuestionados en los tribunales, según Nancy Chang, abogada con el Centro de Derechos Constitucionales.

“El sistema judicial tendrá la opción de defender la Constitución o aceptar su avasallamiento”, destacó.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresó su “profunda desilusión” con el proyecto de ley y la rapidez con que fue aprobado por el Congreso.

No obstante, legisladores conocidos por su defensa de las libertades civiles y que votaron por el proyecto antiterrorista dijeron que lograron importantes concesiones del gobierno que, en un principio, había solicitado que los inmigrantes sospechosos fueran detenidos indefinidamente, sin supervisión judicial.

Así mismo, lograron que las medidas más polémicas, que amplían las facultades de vigilancia del gobierno, caduquen a los cuatro años, salvo que el Congreso vote la extensión de su aplicación.

“Artículo tras artículo, hemos agregado garantías que no existían en el proyecto (original) del gobierno”, declaró el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la cámara alta.

“Hemos hecho todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense del abuso de esta nueva herramienta de aplicación de la ley”, aseguró.

